



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ
D.C.

Bogotá D.C., trece (13) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

RADICADO:	11001-33-35-026-2018-00364-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	FLOR ÁNGELA MEJÍA PINZÓN
DEMANDADO:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF

En el presente asunto **FLOR ÁNGELA MEJÍA PINZÓN** promueve demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra del **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**, con la finalidad de obtener la nulidad del oficio S-2017-092210-2500 de fecha 21 de febrero de 2017, mediante el cual negó el reconocimiento y pago de los diferentes emolumentos laborales, dejados de percibir, con ocasión a su verdadero y real vínculo laboral con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por la existencia de una continuada subordinación, dependencia y remuneración.

Ahora bien, analizadas las pruebas allegadas al plenario, este despacho observa que no es posible avocar el conocimiento de la demanda presentada, de conformidad con las siguientes,

CONSIDERACIONES

En primer lugar, se tiene que el artículo 104 del C.P.A.C.A., indica cuales son los procesos que conoce la Jurisdicción Contencioso Administrativa, señalando para el efecto lo siguiente:

*“ART. 104.- **De la jurisdicción de lo contencioso administrativo.** La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*

Igualmente conocerá de los siguientes procesos:

(...)

4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público.

Negrilla y Subraya fuera de texto

De la misma manera, el numeral 4° del artículo 105 ibidem, señala unas excepciones frente a ciertos asuntos de los que **no** conoce la Jurisdicción Contencioso Administrativo, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 105. EXCEPCIONES. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos:

(...)

4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales.

Negrilla y subraya fuera de texto

Adicionalmente, el Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, en su artículo 2°, preceptúa:

“ARTICULO 2o. COMPETENCIA GENERAL. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:

1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo”. (...)

Corolario de lo anterior, la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, en su artículo 36 señala:

“ARTÍCULO 36. Durante el transcurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñarán y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas.

La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustitutas recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes”.

Por su parte, el Decreto 289 de 2014, por el cual reglamenta parcialmente el artículo 36 la Ley 1607 de 2012, respecto a la modalidad de vinculación y la calidad de las Madres Comunitarias en los artículos 2º y 3º, reguló lo siguiente:

“ARTÍCULO 2o. MODALIDAD DE VINCULACIÓN. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.

ARTÍCULO 3o. CALIDAD DE LAS MADRES COMUNITARIAS. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF.”

Negrilla y subraya fuera de texto.

Luego entonces, de la normatividad antes anotada se puede establecer que la Jurisdicción Contencioso Administrativa **no conoce demandas en las cuales** se pretendan dirimir conflictos entre trabajadores oficiales y entidades públicas, **o que provengan de un contrato de trabajo.**

Ahora bien, en el caso sub lite, la demandante pretende dirimir ante esta instancia judicial, un conflicto surgido con ocasión de la negativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de reconocer y pagar los diferentes emolumentos laborales dejados de percibir, con ocasión a su verdadero y real vínculo laboral con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por la existencia de una continuada subordinación, dependencia y remuneración.

No obstante lo anterior, nos encontramos frente a una controversia, en el cual las Madres Comunitarias no tienen la calidad de servidoras públicas, según el Decreto *Up Supra*, por lo que es claro, que el presente asunto no es de conocimiento de esta Jurisdicción, sino que por el contrario, le corresponde conocer a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, en virtud de lo dispuesto en el Código Procesal del Trabajo¹, en su numeral 1º del artículo 2º, y que fuera reseñado anteriormente.

A su vez, el H. Consejo de estado en providencia emitida el 28 de marzo de 2019², al resolver un recurso de reposición interpuesto en contra del auto que declaró la falta de competencia para conocer del asunto, al tratarse de una

¹ (Ley 712 de 2001 – Reforma del Código Procesal del Trabajo)

² Sección Segunda – Subsección “A” – Consejero Ponente: William Hernández Gómez, Expediente 11001-03-25-000-2017-00910-00 (4857) – Demandante: Colpensiones – Demandado: Héctor José Vázquez Garnica.

controversia suscitada sobre la seguridad social de un trabajador del sector privado, preceptuó lo siguiente:

(...)

De acuerdo con lo anterior, la jurisdicción ordinaria laboral puede pronunciarse sobre la legalidad del reconocimiento de un derecho derivado de la relación laboral o de la seguridad social, independientemente de la forma en que este se produzca. V.gr:

- a- Es natural que la jurisdicción ordinaria conozca de las controversias que proponen los trabajadores del sector privado afiliados a una entidad de previsión social, por ejemplo, una AFP, cuanto se reconoce o niega un derecho pensional. Cuando la AFP es privada, ese reconocimiento se produce a través de acto privado, sin embargo, cuando es pública como lo es Colpensiones, este se hace naturalmente a través de acto administrativo – resolución -. En ambos casos el control sobre la legalidad del reconocimiento prestacional recae en el juez de la seguridad social, previamente asignado por el legislador, con independencia de la forma en que se adoptó la decisión.*
- b- Lo mismo sucede con la controversia que se genera sobre el reconocimiento de prestaciones o liquidación laboral que realiza cualquier entidad pública frente a un trabajador oficial, porque independientemente de que aquel o aquella se haga a través de acto administrativo, el litigio lo resuelve el juez especializado del contrato de trabajo.*

De no entenderse así, perderían efecto útil las normas de competencia de las controversias originadas directa o indirectamente de un contrato de trabajo o de conflictos de la seguridad social entre trabajadores oficiales y las entidades administradoras del sector público (art. 104 ordinal 4 y 105 ordinal 4 del CPACA), por la sencilla razón de que prevalecería un criterio formal, en el cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo ineludiblemente sería la competente para conocer de todas las controversias, puesto que al tratarse de entidades públicas solo pueden y deben decidir o manifestar su voluntad por medio de actos administrativos.

En efecto, es conocido que las administradoras públicas de régimen de seguridad social como Colpensiones y el antiguo ISS siempre deciden y han decidido las prestaciones de sus afiliados a través de actos administrativos – resoluciones -. Lo propio sucede cuando las entidades públicas de todos los órdenes, reconocen o niegan derechos laborales y prestacionales a los trabajadores oficiales.

Es decir, por el solo hecho de que estos derechos y prestaciones se decidan negativa o positivamente a través de actos administrativos, no muta o cambia la jurisdicción competente para conocer de la controversia. De ahí que sea la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social la competente para decidir sobre estos conflictos, en cuyo caso el juez laboral, mediante sentencia reconoce o niega el derecho u ordena los pagos y compensaciones a que haya lugar, sin necesidad de anular el acto administrativo que negó o reconoció el derecho”.

Así las cosas, no cabe duda que la señora **Flor Ángela Mejía Pinzón**, no tiene una relación legal y reglamentaria con una entidad del sector público, sino que por el contrario, su vinculación lo es con una entidad administradora del Programa de Hogares Comunitarios del ICBF, por lo que dicha controversia la debe asumir la Jurisdicción Ordinaria Laboral, y no la Jurisdicción Contenciosa Administrativa perdiendo así competencia éste Despacho para conocer del presente asunto.

En virtud de lo anterior el Despacho,

R E S U E L V E :

PRIMERO.- DECLARAR QUE ESTE JUZGADO CARECE DE COMPETENCIA para conocer la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, promovida por la señora **FLOR ÁNGELA MEJÍA PINZÓN**, contra el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF**.



SEGUNDO.- REMITIR el presente expediente, una vez ejecutoriado este proveído, a los **JUZGADOS LABORALES DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - REPARTO**, por conducto de la Oficina de Apoyo, de conformidad con las consideraciones anotadas en la parte motiva.

TERCERO.- Por Secretaría déjense las constancias respectivas y dese cumplimiento a la mayor brevedad a lo aquí resuelto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez

FV

<div style="text-align: center;"> JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. SECCIÓN SEGUNDA Por anotación en ESTADO ORDINARIO notifico a las partes la providencia anterior hoy 14 DE MAYO DE 2019, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)  LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA SECRETARIA</div>
